



Municipalidad de Tres de Febrero

“2023-40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

Corresponde Expediente Nro.: 4117-37593-2023

Caseros,

- 4 NOV 2023

VISTO :

Las presentes actuaciones 4117-37593-2023, iniciadas por el Sr. **JUAREZ CESAR HERNAN**, titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 31.774.086 contra **EDENOR S.A. CUIT: 30-65511620-2**, en virtud de lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Nacional 24.240 y ley Provincial 13.133 y demás normativa del derecho de consumo aplicable.

CONSIDERANDO :

A fojas 2/32 se presenta el consumidor manifestando que a raíz de un corte de energía eléctrica que tuvo lugar el 1 de marzo de 2023 al volver el servicio sufrió una baja de tensión eléctrica en su domicilio, sito en la calle José Murias Nro. 1479 de la localidad de Caseros, lo que ocasionó que varios artefactos eléctricos dejaran de funcionar, como una xbox 360, una notebook Sony Vaio PCG-61611U y una TV LG 9132 LH70YR. Adjunta a fojas 8 un presupuesto de los arreglos necesarios de los artefactos mencionados precedentemente, que asciende a la suma de \$ 201.850,00. Sin embargo, habiendo realizado varios reclamos en EDENOR SA, la empresa denunciada no se hizo cargo de los arreglos presupuestados.

Edenor S.A. no propone ninguna solución, lo que motivó el presente reclamo ante esta Dirección (ver fojas 10).

Que por lo expuesto precedentemente, la pretensión del denunciante es la compensación por los gastos y la reparación de los productos afectados.

Que a fin de acreditar la relación de consumo por lo establecido en el art. 3 de la Ley Nacional n° 24.240, se agrega documental consistente en: factura de edenor a fojas 32, nota de respuesta de Edenor S.A.(fojas 10), y intercambio de mensajes entre Edenor S.A. y el denunciante (ver fojas 15 a fojas 30), presupuesto (fojas 8).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley n° 13.133 este Organismo citó a las audiencias de conciliación para los autos “JUAREZ CESAR HERNAN C/ EDENOR S.A.”, conforme surge de fojas 36 (28/06/23), y fojas 37 (11/08/2023).

En el acta de fojas 16, Edenor a través de su representante, expone que, sin reconocer hechos ni derechos, se procedió a su análisis. Desde el área técnica no verifican anomalía o evento alguno que pudiera haber causado los daños invocados. Que, por lo expuesto, solicita el cierre y archivo de las presentes actuaciones.

El denunciante no concuerda con la postura de la firma requerida.

A fojas 39/41 se le imputa la presunta infracción de los artículos 5 y 6 de la Ley Nacional 24.240, lo que se le notifica con fecha 20 de septiembre de 2023, conforme surge de fojas 43.

A fojas 44/53 se presenta Edenor SA y en cumplimiento de lo ordenado en el art 50 de la Ley provincial 13.133 adjunta su descargo y la prueba que hace a su derecho.

En su descargo, la empresa denunciada plantea como cuestión preliminar la competencia. En este sentido Edenor S.A. sostiene la incompetencia para dictar disposiciones sancionatorias, por tratarse estrictamente de cuestiones federales. Asimismo entiende que por tratarse de deficiencias en la calidad del producto técnico el ENRE tiene competencia especial para imponer sanciones y es el único órgano administrativo facultado

Corresponde Expediente Nro.: 4117-37593-2023

para aplicar una multa por incumplimientos de las obligaciones de la empresa. Entiende que la OMIC no puede intervenir para el supuesto incumplimiento de las normas de calidad del producto técnico y solo puede intervenir en casos donde la obligación sea derivada de la Ley de Defensa al Consumidor y no se vinculen directamente con la prestación del servicio público federal.

A continuación formula descargo sosteniendo que los artículos 5 y 6 de la ley 24.240 solo refieren al cuidado de la salud del usuario, lo que no se condice con las constancias de autos, tratándose el reclamo únicamente de la supuesta afectación a electrodomésticos. De esta manera entiende que en caso de aplicación de una multa la misma sería nula por falta de motivación y la sanción sería inconstitucional.

Asimismo, y a tenor de que resulta imposible de probar un “no hecho” la denunciada manifiesta que la prueba solo versa sobre hechos que existieron, siendo lo único que puede hacer es aportar datos que hagan presumir la inexistencia del hecho presuntamente dañoso.

Edenor S.A. plantea que no existió evento o anomalía alguna dentro de las instalaciones de la Distribuidora capaces de generar el daño que el Sr. Juárez reclama

A fojas 54 se dan por concluidas las diligencias sumariales y se cierra la instancia conciliatoria, encontrándose la presente en condiciones de ser resueltas.

En esta instancia, en primer lugar es preciso destacar que el acto administrativo dictado por esta Dirección de Defensa del Consumidor, goza de la presunción de legitimidad propia de los órganos del Estado y por ende el mismo ha sido dictado conforme a derecho y tomando como base el ordenamiento jurídico vigente.

La Ley N° 13.133, establece que serán los Municipios quienes ejerzan las funciones emergentes de la propia Ley y de la Ley Nacional 24.240 (conforme Artículo 79), a tales efectos, le corresponde implementar el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa (conforme Artículo 81).

Corresponde Expediente Nro.: 4117-37593-2023

Que se establece en cabeza de los Municipios la facultad de aplicar los procedimientos y las sanciones previstas en la ley y respecto de las infracciones cometidas en su territorio, conforme lo plasmado en el Artículo 80.

Que las Oficinas Municipales de Información al Consumidor han sido creadas con el objeto de asesorar, evacuar consultas, brindar información, orientación, educación, recibir denuncias, entre otras previstas en la Ley (conforme 81).

Los usuarios y consumidores tienen a su disposición las Direcciones de Defensa del Consumidor a fin que puedan realizar consultas sobre sus derechos y efectuar las denuncias que corresponden.

Conforme lo expuesto, la incompetencia alegada por la denunciada, no puede prosperar, encontrando su fundamento en el artículo 42 de Nuestra Carta Magna “ Los consumidores y usuarios de bienes y servicios, consignándose a las autoridades que brindaran su protección. El citado artículo reza “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, **en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;** a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.

El referido artículo no ha conferido la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores con exclusividad al Gobierno Federal, por ende todos los miembros del estado pueden intervenir a fin de brindar protección al consumidor, con el objeto de salvaguardar sus derechos.

Corresponde Expediente Nro.: 4117-37593-2023

Por su parte el Artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, expresa “ Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz. La Provincia proveerá a la educación para el consumo, al establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos y promoverá la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores”..

La Ley 13133 en su artículo 1 sostiene “ La presente Ley establece las bases legales para la defensa del consumidor y del usuario según los términos del artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y tiene por objeto establecer las reglas de las políticas públicas y los mecanismos administrativos y judiciales para la efectiva implementación en el ámbito provincial: a) De los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. b) De las normas de protección consagradas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y disposiciones complementarias, sin perjuicio de las competencias concurrentes de la Autoridad Nacional de Aplicación”.

El Artículo 79 del mismo cuerpo legal dice “ Los Municipios serán los encargados de aplicar procedimientos y las sanciones previstos en esta Ley, respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios y con los alcances establecidos en este artículo ..”.

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional y artículo 38 de la Constitución Provincial, así como la demás normativa aplicable, el contrato de consumo debe ser cumplido conforme lo contratado y sin generar ningún daño en el usuario, **su salud, seguridad e intereses económicos.**

Atento los dichos del denunciante, en el presente caso, la prestación del servicio brindado por la denunciada le habría generado un daño en su patrimonio y por ello, caería dentro del ámbito de aplicación de la LDC y de competencia de esta OMIC.

En concordancia con lo detallado hasta aquí, el artículo 25 de la Ley 24.240 en su parte final establece: "...Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley..."

Es decir, la elección de la autoridad que intervendrá es del consumidor, dado que el ENRE no posee una competencia exclusiva y excluyente. Por el contrario, se aplica el principio in dubio pro consumidor.

Sumado a ello, y de vital importancia es que si bien la empresa denunciada hace un planteo en relación a la competencia, jamás ha solicitado que la Dirección interviniente se declare incompetente, ni ha cuestionado la legitimidad del acto administrativo, o la constitucionalidad de la norma que otorga las facultades cuestionadas.

Ello es concordante con la actitud procesal sostenida por la empresa en autos que se ha presentado en reiteradas oportunidades y ha participado de las audiencias conciliatorias y realizando manifestaciones y en ningún caso ha cuestionado la competencia de esta Dirección. Todo ello, teniendo en cuenta que la oportunidad procesal de plantear la incompetencia es la primera presentación en el expediente. Por lo tanto, en virtud de la teoría de los actos propios, la empresa no puede cuestionar en su cuarta presentación una competencia que ya ha aceptado tácitamente al participar en el proceso sin cuestionamiento alguno.

Por lo precedentemente invocado, esta Dirección entiende que es plenamente competente, y en consecuencia cada uno de los actos que la misma dicta resultan a todas luces legítimos, conforme lo normativa vigente en la materia y respetando los derechos del consumidor plasmados en Nuestra Carta Magna.-

Corresponde Expediente Nro.: 4117-37593-2023

Entrando en la cuestión de fondo, siendo que el presente caso hace referencia al daño causado por la prestación de un servicio público es menester recordar que nuestra Constitución Nacional preserva al usuario, en su artículo 42, al reconocer que tienen derecho, en la relación de consumo, a la **protección de su salud, seguridad e intereses económicos**; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

En igual sentido la Constitución Provincial, en su artículo 38 le reconoce el derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, **a la promoción y defensa de sus intereses económicos** y a una información adecuada y veraz.

Por su parte la ley Provincial 13.133 en su artículo 5, también establece la obligación del Estado a través de la correspondiente Autoridad de Aplicación de arbitrar los medios necesarios para el fiel, oportuno e íntegro cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, tendientes a garantizar que los productos y servicios comercializados sean inocuos en el uso a que se destinen o normalmente previsible, protegiendo a los consumidores y usuarios frente a los riesgos que importen para la salud y seguridad.

La ley Nacional 24.240 es concordante con lo establecido hasta aquí, siendo que su artículos 5 y 6, prevé la protección del consumidor que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsible o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. En el caso de las cosas y Servicios Riesgosos, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.

Asimismo el artículo 40 de la misma ley establece que si **el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor** y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio.

También la jurisprudencia es unánime en cuanto a la protección del usuario o consumidor de bienes y servicios, que no debe verse afectado en su seguridad, integridad física o intereses económicos como consecuencia de una relación de consumo. En tal sentido sostiene:

*“...La responsabilidad contractual emergente de quien incurre en un incumplimiento imputable -la empresa prestataria de servicios eléctricos-, lo coloca en la obligación de restituir al titular de la indemnización, aquella situación patrimonial en que se hallaría si el contrato de prestación de servicios eléctricos hubiese sido debidamente cumplido. Partiendo de estos conceptos, el perjuicio puede estar dado por la privación o destrucción de bienes existentes en el patrimonio del acreedor al momento del evento dañoso o gastos que en razón de ese evento ha debido realizar, lo que conforma el daño emergente, así como también por la privación de un incremento patrimonial que la víctima razonablemente podía esperar del cumplimiento contractual frustrado prestación de servicios de electricidad domiciliario -, lo que le ha impedido obtener ciertos lucros o ganancias que se traducen en un empobrecimiento económico...”*CC0000 DO 87403 RSD-320-8 S 11/11/2008 Juez HANKOVITS (SD) Carátula: Gutierrez Gaspar y otra c/Clyfema s/Daños y perjuicios Magistrados Votantes: Hankovits-Canale-Dabadie

*“...No se trata de focalizar al ejecutor material y directo del perjuicio cuando se trata como en el caso de daños causados por la electricidad, sino sobre todo al titular de la actividad de la que el daño ha resultado, en cuanto organizador, explotador, empresario, etc., ello aunque la actividad pueda haber estado desenvuelta materialmente a través de otros. En tales casos, lo decisivo no es la autoría del daño, sino la autoría del riesgo, con lo cual la génesis de la imputación no reside en el hecho lesivo último, sino en la primera esfera de peligro...”*CC0002 SM 57614 RSD-149-6 S 01/06/2006 Juez SCARPATI (SD) Carátula: Farías, Horacio y otro c/Empresa Dist. y Comerc. Norte S.A. s/Daños y perjuicios Magistrados Votantes: Mares-Occhiuzzi-Scarpati.

“...La obligación de seguridad se basa en la buena fé como principio rector que gobierna la interpretación de los contratos, es un deber secundario de conducta,

irrenunciable y se inscribe dentro de los daños que pueden ser prevenidos, apareciendo como una expresión fundamental en el ámbito del Derecho del Consumo, correspondiendo interpretar las situaciones que le son propias con consideración de que se trata de un plexo legal de orden público (art. 65 ley 24240), resultando de aplicación obligatoria y preeminente frente a cualquier otra norma que la contradiga (arts .2° y 3° de la misma). ..."LEY 24240 Art. 65 | LEY 24240 Art. 2 | LEY 24240 Art. 3 .CC0002 SM 70816 8 RSD-134/16 S 07/07/2016 Juez SCARPATI (SD) Carátula: CHAVEZ, LEANDRO Y OTRO C/ C.E.A.M.S.E. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Magistrados Votantes: Scarpati-Mares Tribunal Origen: JC0800SM

Surge claro del plexo normativo aplicable que un usuario o consumidor no debe verse perjudicado en ninguno de los aspectos de su vida, como consecuencia de un contrato de consumo. Es decir la protección del mismo debe ser integral.

Esta obligación genérica de no dañar se ve potenciada en el derecho de consumo, debido al desequilibrio sistémico que afecta estas relaciones y más aún cuando el servicio brindado es un servicio que por sus propias características puede considerarse riesgoso.

En las presentes actuaciones existe un daño en el patrimonio del consumidor que se encuentra acreditado con la factura obrantes a fojas 8 por el valor de \$ 201.850,00 que incluye la reparación de una notebook sony vaio PCG-61611u (problema en el chip de video y corto entre capas en la fuente interna, y cambio de mother), un TV LG 9132LH70YR (problema en la placa main, y procesador en corto), y XBOX 360 (reparación del módulo del HDMI en corto y cambio de placa). Dichos daños no fueron cuestionados por la empresa.

Los únicos cuestionamientos de la empresa respecto al reclamo del usuario son en relación al nexos causal y responsabilidad existente entre el daño y el servicio brindado., sosteniendo la empresa la falta del mismo.

Corresponde Expediente Nro.: 4117-37593-2023

Por ello, la única cuestión en debate en estas actuaciones es si la empresa prestataria del servicio tiene responsabilidad en el daño causado. Es decir, la prueba a producirse en autos debe apuntar únicamente a acreditar o desacreditar dicho extremo.

En este sentido es menester destacar una vez más las particulares características del derecho de consumo, que es un derecho netamente tuitivo, que busca equilibrar el desequilibrio existente entre las partes que conforman estas relaciones.

El artículo 53 de la ley 24.240 sostiene que los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.

Es claro que la normativa mencionada pone en cabeza del proveedor una carga probatoria diferenciada, exigiendo un mayor esfuerzo de su parte debido a sus superioridad técnica, y económica. Es el proveedor quien se encuentra en poder del conocimiento profesional y poderío económico, es quien cuenta con mayor acceso y facilidad probatoria.

Es decir que este artículo consagra la postura doctrinaria y jurisprudencial que defendía la aplicación de la llamada "teoría de las cargas dinámicas" a favor del consumidor, con lo que éste pasa a tener un argumento más en su favor para sostener que el proveedor (entiéndase cualquier eslabón de la cadena) está en mejores condiciones de demostrar que la cosa no tenía vicio, en lugar de ser el consumidor, quien debe acreditar dicho extremo.

Asimismo, se ha dicho que como el sistema de responsabilidad tiende a evitar poner en cabeza del consumidor una carga que le resulta dificultosa o prácticamente imposible, la prueba debe ser arrimada por quien se encuentre en mejores condiciones, que en la mayoría de los casos resulta ser la parte fuerte de la relación.

Dicho de otra manera al consumidor le bastaría probar que, hubo un daño en su persona o patrimonio, siendo el proveedor quien deberá demostrar que no había vicio en

el bien o servicio brindado o, por supuesto, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (es decir, demostrar causa ajena).

En este sentido también es unánime la jurisprudencia, que sostiene:

“...Tratándose de una relación de consumo, donde rige la teoría de la carga dinámica de la prueba (art. 53, ley 24.240), la empresa demandada, atento a su profesionalidad (arts. 902 y 909, Cód. Civil), es quien está en mejores condiciones para acreditar ciertos extremos. La decisión empresarial de retirar del establecimiento el producto sobre el cual debería haberse realizado una prueba ineludible para probar uno de los extremos de la causa resulta contraria a lo establecido en la letra del art. 53 de la ley (art. 289, C.P.C.C.)CPCB Art. 289 Ver Norma | CCI Art. 902 | CCI Art. 909 | LEY 24240 Art. 53 |SCBA LP C 117760 S 01/04/2015 Juez DE LÁZZARI (SD) Carátula: G, A. C. contra "Pasema S.A." y otros. Daños y perjuicios Magistrados Votantes: de Lazzari-Genoud-Hitters-Kogan Tribunal Origen: CC0001SI.

“...Ante daños ocasionados a las personas y/o bienes de propiedad de los usuarios, la protección a éstos debida impone al prestatario del servicio la demostración que de su parte no hubo culpa en la causación del daño. Ello en el marco de la relación de consumo, calidad que reúne el vínculo jurídico entablado entre la concesionaria y el usuario en los términos de la ley 24.240 (arts. 3, 25, 31 -penúltimo párrafo- y concs. en el texto originario y con las modificaciones de las leyes 24.787 y 26.631)...”LEY 24240 Art. 25 | LEY 24787 | LEY 24240 Art. 31 | LEY 26631 | LEY 24240 Art. 3 |SCBA LP B 63779 S 30/05/2012 Juez HITTERS (SD) Carátula: Usina Popular y Municipal de Tandil Sociedad de Economía Mixta c/Provincia de Buenos Aires (O.C.E.B.A.) s/Demanda contencioso administrativa Magistrados Votantes: Hitters-Genoud-Soria-Kogan.

“...La actual Jurisprudencia nos va mostrando como los aportes del derecho de consumo han comenzado a trasladarse y reflejarse en el derecho de daños, e incluso en el ámbito procesal, que deja de lado la distribución clásica de la carga de la prueba, con la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas, es decir, quien está en mejores condiciones de probar debe hacerlo. En síntesis, los principios generales del derecho de

Defensa del Consumidor, han atravesado a todo el ordenamiento jurídico dando nacimiento a un nuevo derecho de daños. Tales principios deben constituir el horizonte axiológico que se impone a los magistrados en sus sentencias, quienes tienen ante sí una función trascendental en la protección de los débiles socioeconómicos y jurídicos. CC0001 LZ 74678 RSD 108/2017 S 23/08/2017 Juez RODIÑO (SD) Carátula: Gonzalez, Liliana Mabel c/ Dia Argentina S.A. s/ Daños y Perjuicios Magistrados Votantes: Rodiño-Igoldi Tribunal Origen: JC1000LZ.

Corresponde destacar que el daño alegado por la consumidora no es consecuencia directa del corte de suministro, sino de la sobretensión generada al devolver el servicio a los domicilios particulares y ello es llevado a cabo por la empresa denunciada. Edenor SA no acreditó sus dichos y tampoco pudo demostrar la responsabilidad de otro en este daño denunciado. No ha adjuntado prueba alguna que acredite sus manifestaciones.

Como corolario, podemos concluir que en las presentes actuaciones se encuentran acreditados y no cuestionados los daños sufridos por el usuario en su patrimonio. Simplemente cuestiona que haya sido consecuencia de un problema de servicio.

En conclusión, siendo carga de la parte denunciada acreditar la inexistencia de relación causal entre el daño ocasionado y no cuestionado y el servicio brindado, la misma no ha aportado elementos en dicho sentido. Por ello, no ha logrado desvirtuar la presunción detallada más arriba, quedando acreditada la infracción a los artículos 5 y 6 de la ley 24.240.

También es importante destacar en esta instancia, de conformidad con lo establecido por el artículo 49 de la Ley 24.240 y artículo 77 de la Ley Provincial 13.133, la posición hegemónica y monopólica en el mercado de la empresa denunciada.

En consecuencia de todo lo desarrollado hasta aquí, en cuanto al resarcimiento del daño previsto en el artículo 40 bis, el mismo establece en su parte pertinente "... Daño directo. El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios..."

El daño aquí manifestado por el consumidor es una consecuencia directa de la violación del deber de seguridad y del incumplimiento de esta ley.

En las presentes actuaciones el daño en el patrimonio del consumidor que se encuentra acreditado surge de la factura obrantes a fojas 8, por la suma de \$ 201.850,00 valor que no fue cuestionado por la empresa, como ya hemos desarrollado previamente. La suma mencionada anteriormente deberá actualizarse con tasa activa del Banco Provincia para restantes operaciones en pesos desde la fecha de la factura 10.03.2023 hasta su efectivo pago. A la fecha de este pronunciamiento, el daño actualizado asciende a la suma de **\$382206,56 (PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS)**

Atento el estado de autos y siendo que la presente denuncia tiene como base un reclamo por daños generados por un servicio público domiciliario, la misma se encuentra comprendida dentro de lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional, artículo 38 de la Constitución Provincial, Ley Nacional 24.240 y Código Provincial de Implementación de Usuarios y Consumidores Ley 13.133 de la Provincia de Buenos Aires.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la ley Nacional 24.40, Ley Provincial 13.133, artículos 47, 48, 79, 80, 81 y concordantes y Decreto Municipal 2/2022

Por ello,

**EL SECRETARIO DE
ATENCION AL VECINO
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Tener por verificada la infracción de los artículos 5 y 6 de la Ley nacional 24.240 por parte de **EDENOR S.A. CUIT: 30-65511620-2.**

Artículo 2º.- De conformidad con lo establecido por los arts 47 de la Ley Nacional 24240 y art 73 de la Ley Provincial 13133 sancionar a la empresa **EDENOR SA, CUIT 30-65511620-2** con una multa por el monto equivalente a 2 (dos) canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) a la que deberá ser abonada dentro de los 10 días hábiles, depositando tal monto en la cuenta abierta a nombre de la Municipalidad de Tres de Febrero, en el Banco Provincia de Buenos Aires, Sucursal 5003, cuenta corriente 50600/3, CBU 0140060101500305060031 CUIT 30-99900124-2.

Artículo 3º. En virtud de lo establecido por el artículo 40 bis de la ley 24.240 y de conformidad con las constancias de autos, intimar a la denunciada **EDENOR SA CUIT 30-65511620-2** a abonar el daño acreditado al consumidor por la suma de **\$382206,56 (PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS)** la que debere actualizarse con tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta su efectivo pago. Dichas sumas deberán ser depositadas en la cuenta que oportunamente denuncie el consumidor, dentro de los diez (10) días hábiles, de notificada la misma.

Artículo 4º.- Publíquese la parte dispositiva de las presente por un día en el Diario JOSE INGENIEROS sito en la calle ROTARISMO ARGENTINO 2027 DE JOSE INGENIEROS, Pdo de Tres de Febrero dentro de los 10 días hábiles de notificada la presente, debiendo acreditar ante esta Dirección la mencionada publicación dentro de los 5 días hábiles de concluida la misma.

Artículo 5º.- NOTIFÍQUESE a la parte denunciada en su domicilio, haciéndole saber que en el plazo de 10 (DIEZ) días hábiles e improrrogables de notificada la presente deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado precedentemente, acompañando el certificado de transferencia o depósito que acredite el cumplimiento de la sanción, por ante nuestras Oficinas sitas en la calle Juan Bautista Alberdi 4840, 1er. Piso, Localidad de Caseros (C.P.

Corresponde Expediente Nro.: 4117-37593-2023

1678), Partido de Tres de Febrero, en el horario de 8:00 a 14:00 hs, todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones tendientes a su cobro.


PABLO H. CASNA
SECRETARIO DE ATENCION AL VECINO
MUNICIPALIDAD TRES DE FEBRERO

RESOLUCION N°

208/23


FRANCO MARTIN
DIRECTOR DE
DOCUMENTACION Y REGISTRO
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO